



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/7/28/Add.4
3 de marzo de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Séptimo período de sesiones
Tema 3 de la agenda

**PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS,
CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO**

**Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial
del Secretario General sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos**

Adición

MISIÓN A LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA^{* **}

* El resumen del presente informe de misión se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho figura en el anexo al resumen y se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó.

** El presente documento se presenta con retraso para incluir en él la información más reciente.

Resumen

En este informe se presentan las conclusiones y recomendaciones formuladas por la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos con respecto a la misión que realizó a la ex República Yugoslava de Macedonia del 23 al 25 de septiembre de 2007.

El objeto de la misión de seguimiento era evaluar los progresos y las dificultades registrados en la aplicación de las recomendaciones de la Representante Especial, cuatro años después del informe sobre su primera misión.

La Representante Especial observa que desde 2003 se han registrado algunas mejoras, en particular una mayor capacidad y profesionalismo de los defensores de los derechos humanos, la aprobación de legislación pertinente para el trabajo de los defensores, y el papel positivo de las organizaciones internacionales en el fortalecimiento de los defensores de los derechos humanos mediante la creación de capacidad y la financiación.

La situación de los defensores de los derechos humanos aún tiene que mejorar en varias esferas para responder a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida como la Declaración sobre los derechos de los defensores de los derechos humanos. La Representante Especial dirige diversas recomendaciones al Gobierno, a los defensores de los derechos humanos y a la comunidad internacional para facilitar una mejor aplicación de la Declaración.

En el cuadro siguiente se compara la situación de los defensores de los derechos humanos en 2003, según la evaluación realizada en la primera misión, con la situación observada en 2007, con ocasión de la segunda misión. Se presenta un panorama general de los acontecimientos ocurridos en cuatro años, en los que se centró la misión de seguimiento. En el cuadro no se resumen todas las conclusiones que figuran en este informe, en particular las que no se relacionan directamente a las cuestiones y las preocupaciones planteadas en la primera misión.

**Comparación de la situación de los defensores de los
derechos humanos en 2003 y 2007**

Primera misión - 2003^a	Misión de seguimiento - 2007
Contexto en que trabajan los defensores de los derechos humanos	
La prioridad política era la aplicación del Acuerdo de Ohrid (párrs. 10 a 13 ^b).	<p>En 2007, los esfuerzos para integrarse a la Unión Europea dominan el panorama político. Las consecuencias de la importancia del programa para la integración en la Unión Europea son visibles en la situación general de los derechos humanos y la sociedad civil en el país (párr. 11^c).</p> <p>No obstante, la voluntad política y el compromiso auténtico de las autoridades nacionales son fundamentales para que los logros sean sostenibles y que las prioridades en materia de derechos humanos no sean objetivos programáticos vacíos con miras a la adhesión a la Unión Europea (párr. 16).</p>
El proceso de descentralización auspiciado por el Acuerdo de Ohrid suscita ciertas preocupaciones respecto de los medios con que cuentan las autoridades locales para cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Los defensores se concentran en Skopje, con la consiguiente limitación de su capacidad para vigilar la situación de los derechos humanos a nivel local (párr. 15).	Esta situación no ha dejado de ser una preocupación, aunque se ha corregido en parte con programas de fomento de la capacidad destinados concretamente a reforzar las organizaciones locales de la sociedad civil y colmar las lagunas en la vigilancia en el plano local. Otro aspecto positivo es la estructura de la Oficina del Defensor del Pueblo, que tiene seis oficinas regionales en el país. Sin embargo, es necesario intensificar la sensibilización para superar la falta de colaboración de las autoridades locales con la Oficina del Defensor del Pueblo. En principio, los municipios deberían financiar a las organizaciones de la sociedad civil, pero todavía no es así (párrs. 17 a 20).
La discriminación por motivos étnicos es una causa fundamental de muchas violaciones de los derechos humanos (párr. 19).	Sigue preocupando la discriminación entre etnias. Es un indicio positivo el hecho de que haya mayores oportunidades de acceso a la enseñanza superior para las personas de etnia albanesa y a la formación previa al empleo para los empleados públicos pertenecientes a una minoría (párrs. 21 y 22).
El Gobierno tiene la intención de dar mayor importancia a la educación en materia de derechos humanos en los programas de enseñanza (párr. 22).	Se realizan actividades especiales, pero las medidas concertadas que se adoptan son limitadas para aplicar el Plan de Acción para la primera fase del Programa Mundial para la educación en derechos humanos (párr. 23).
Defensores de los derechos humanos	
La mayoría de los defensores de los derechos humanos necesitan conocer mejor las normas internacionales de derechos humanos, así como formación y especialización en la metodología de elaboración y ejecución de	Se han registrado importantes progresos en la capacidad y la formación de los defensores de los derechos humanos, que se han perfeccionado en las metodologías, estrategias y marcos de planificación, y se han especializado en la representación y la comunicación en

estrategias en materia de derechos humanos (párr. 41).	materia de derechos humanos. En general, expresan sus ideas con mayor claridad y más concretamente, con el respaldo de más años de experiencia (párr. 24).
Sus principales campos de trabajo son los derechos de la mujer y los derechos humanos de las comunidades romaníes (párrs. 26 y 28).	Los defensores de los derechos humanos confirman la importancia de los dos campos de trabajo. Adquirió importancia el trabajo en relación con los derechos de las personas con discapacidad y surgen áreas nuevas relacionadas con los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales y los intersexuales (párr. 26).
La mayoría de las organizaciones de derechos humanos se concentran en Skopje, y son pocas las que trabajan fuera de la capital (párr. 47).	La situación sigue igual, aunque con algunas mejoras, a las que ha contribuido la formación impartida por las organizaciones internacionales a las organizaciones de derechos humanos que trabajan fuera de la capital (párr. 27).
Las mujeres defensoras son numerosas y especialmente activas a nivel de la comunidad (párr. 28).	Sigue considerándose a las organizaciones de mujeres como el movimiento más fuerte de la sociedad civil, con presencia a nivel local y con el porcentaje más alto de participación ciudadana (párr. 29).
Las defensoras se dedican más a la labor de sensibilización y promoción que a la de protección y vigilancia.	En general la situación no ha cambiado, pero hay más actividades de presentación de informes, a raíz de los presentados oficiosamente al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (párr. 30).
Evaluación positiva de la formación impartida por las organizaciones internacionales a los defensores de los derechos humanos (párr. 40).	Los defensores de los derechos humanos calificaron positivamente la formación recibida, que les ayudó a lograr un mayor reconocimiento de su función y a ser más escuchados. Plantearon la necesidad de recibir formación complementaria (párr. 35).
Capacidad limitada de los defensores para realizar funciones de vigilancia y protección (párr. 43).	Algunas mejoras en las actividades de vigilancia y mejor colaboración con las coaliciones regionales e internacionales, aunque los defensores siguen teniendo una capacidad limitada para perseguir judicialmente los casos (párrs. 36 a 38).
La politización de las organizaciones de derechos humanos perjudica la imagen y el trabajo de los defensores (párr. 46).	Esta cuestión sigue preocupando, al igual que la escasa transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil frente al público. Hay iniciativas en marcha en el seno del movimiento de la sociedad civil para promover la transparencia y mejorar su imagen pública (párrs. 40 a 42).
Preocupación por el alcance muy limitado de la tarea de los defensores de los derechos humanos de creación de redes formales entre ellos y de coordinación de sus actividades (párr. 39).	Mejoras en la creación de organizaciones que coordinen la labor en esferas temáticas y persigan objetivos comunes. La Plataforma Cívica de Macedonia constituye un intento para crear un espacio de comunicación y coordinación de las actividades de la sociedad civil. A pesar de estas mejoras, las organizaciones de derechos humanos siguen sin formar una comunidad apta para proteger a los defensores (párrs. 45 a 49).

Los defensores de los derechos humanos se enfrentan a problemas de seguridad, sobre todo relacionados con los tipos de cuestiones que abordan, como la corrupción, la lucha contra la delincuencia organizada, el respeto de los derechos civiles y políticos en zonas anteriormente afectadas por el conflicto, la trata de personas y la recolección de armas. Los defensores también han sufrido agresiones por su origen étnico (párr. 72).	En general, los defensores de los derechos humanos disfrutan de un buen nivel de seguridad, y las agresiones y amenazas contra su seguridad no son sistemáticas. Sin embargo, los defensores que trabajan en algunas esferas temáticas están más expuestos a las violaciones. Tal es el caso de quienes se dedican a luchar contra la corrupción y a las cuestiones de las minorías, como las etnias y/o la religión (párr. 50).
La dependencia casi total de los defensores de la financiación de los donantes internacionales preocupa mucho en cuanto afecta la sostenibilidad a largo plazo de su trabajo (párr. 32).	La realidad de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos del país sigue siendo su dependencia de los donantes internacionales. La financiación internacional se está reduciendo y los recursos disponibles a nivel nacional no son suficientes (párr. 55).
Los donantes no están interesados en financiar proyectos calificados de prioritarios por los defensores (párr. 68).	Con pocas excepciones, los donantes internacionales no atienden las solicitudes de financiación para las cuestiones señaladas como prioritarias por los defensores (párr. 56).
Preocupa mucho que los defensores no estén exentos del pago de impuestos (párr. 35).	El sistema tributario sigue siendo un gran obstáculo para el desarrollo de la sociedad civil. La estrategia de cooperación entre el Estado y la sociedad civil prevé la reforma del sistema tributario y desgravaciones fiscales para las organizaciones de la sociedad civil (párr. 57).
Un entorno propicio	
La Representante Especial recomendó que se ratificara la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (párr. 79 a)).	El país no ha ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Sin embargo, ratificó los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de niños en los conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (párr. 58).
Se tiene una percepción muy buena en general de la libertad de expresión (párr. 53).	Se confirma la opinión general positiva de que se respeta la libertad de expresión, aunque el ambiente es difícil para los defensores que trabajan en la lucha contra la corrupción o las cuestiones de las minorías, o para los que asumen posturas críticas del Gobierno (párr. 60).
Preocupa la falta de una ley sobre el derecho de acceso a la información (párr. 52).	En septiembre de 2006 entró en vigor una Ley sobre el acceso a la información. Si bien se trata de un hecho legislativo positivo, preocupa que no se aplique satisfactoriamente (párrs. 61 y 62).
Se respeta la libertad de asociación (párr. 54).	Se confirma la misma percepción positiva, salvo que se limita y se restringe la asociación en sindicatos del

	sector privado en las empresas con capital privado, en particular en la industria textil (párr. 63).
La consulta con los defensores de los derechos humanos se realiza sólo ocasionalmente y a discreción de las autoridades competentes (párr. 51).	Los procesos de consulta siguen teniendo carácter ocasional. La aprobación de la estrategia de cooperación entre el Estado y la sociedad civil para 2007-2011 es un hecho positivo y podría institucionalizar las consultas con la sociedad civil siempre que haya voluntad política para ejecutarla. El Gobierno es plenamente consciente de la necesidad de que las autoridades locales y el Parlamento apliquen el mismo criterio para que los procesos de consulta se institucionalicen a todos los niveles (párrs. 65 a 70).
Se ha acusado a agentes de policía de cometer abusos. La falta de un procedimiento de denuncia transparente fomenta la impunidad. Preocupa la composición étnica y de género de la policía (párr. 59).	Pueden consignarse varias mejoras en la función de la policía: a) el establecimiento de un procedimiento interno de denuncia; b) una policía con mayor diversidad étnica; c) la ejecución de programas de formación en materia de derechos humanos para la policía; d) el proceso en marcha de establecimiento de una policía de la comunidad; e) una mejor actitud general hacia el ciudadano, con excepción de los romaníes que siguen siendo víctimas de abusos por la policía (párr. 72). Algunos de los actos que preocupan de parte de la policía son los siguientes: a) los abusos cometidos por la unidad Alfi de la policía y la dificultad para investigarlos; b) un mecanismo de control interno deficiente; c) la falta de un mecanismo de control externo; y d) la denegación a los defensores de los derechos humanos de acceso a las comisarías de policía (párrs. 71 a 77).
La Representante Especial recomendó que se aprobara la ley por la que se establece un presupuesto judicial independiente (párr. 79 a)). El sistema judicial tiene un importante atraso acumulado en la tramitación de causas y la justicia es lenta (párr. 64).	La Ley sobre el presupuesto judicial independiente entró en vigor en 2004. Según los representantes de la administración de justicia, es necesario introducir enmiendas para lograr una mayor independencia del poder judicial. La demora en la tramitación de las causas sigue siendo un problema, aunque se han registrado algunos progresos (párrs. 78 y 79).
El Defensor del Pueblo recibe una escasa colaboración y respuesta de las autoridades públicas (párr. 24).	Ha habido mejoras en la colaboración de las autoridades públicas, en particular con la introducción de informes trimestrales sobre la cooperación del Gobierno con el Defensor del Pueblo y las circulares del Ministerio del Interior con instrucciones a la policía para que colabore con el Defensor del Pueblo. Con todo, todavía se requieren mejoras en esta esfera (párrs. 82 a 85).
Estaba prevista la aprobación de legislación para reforzar las funciones de inspección del Defensor del Pueblo (párr. 25).	En 2003 se aprobó legislación, pero no se considera conforme a los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos (párr. 82).

Es necesario que la comunidad internacional preste un mayor apoyo a la Oficina del Defensor del Pueblo (párr. 25).	La Representante Especial se felicita del apoyo prestado por las organizaciones internacionales, especialmente en materia de creación de capacidad (párr. 86).
--	--

^a E/CN.4/2004/94/Add.2.

^b Los números de párrafos que figuran en la columna de la izquierda se refieren al documento E/CN.4/2004/94/Add.2.

^c Los números de párrafos que figuran en la columna de la derecha se refieren al presente informe.

Annex

**REPORT OF THE SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY-GENERAL
ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS, HINA JILANI, ON HER
MISSION TO THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
(23 to 25 September 2007)**

CONTENTS

	<i>Paragraphs</i>	<i>Page</i>
Introduction.....	1 - 4	10
I. THE CONTEXT IN WHICH HUMAN RIGHTS DEFENDERS WORK	5 - 23	10
A. Methodology	5 - 7	10
B. The pace of change	8 - 9	11
C. From the Ohrid Agreement to the European Union.....	10 - 16	11
D. Decentralization	17 - 20	12
E. Progress and setbacks in the overall human rights situation as identified in the 2004 report	21 - 23	13
II. HUMAN RIGHTS DEFENDERS	24 - 57	13
A. Women human rights defenders	29 - 32	14
B. Achievements in building the capacity of human rights defenders	33 - 38	15
C. The independence of civil society organizations and public perception of their role and performance.....	39 - 44	16
D. Networking	45 - 49	17
E. Defenders at risk.....	50 - 54	17
F. Funding.....	55 - 57	18

CONTENTS (*Continue*)

	<i>Paragraphs</i>	<i>Page</i>
III. AN ENABLING ENVIRONMENT	58 - 90	19
A. International human rights instruments	58 - 59	19
B. Freedom of expression, access to information and freedom of association.....	60 - 64	19
C. Government's attitude and policies	65 - 70	20
D. The police	71 - 77	21
E. The judiciary	78 - 81	22
F. The Ombudsman	82 - 86	23
G. The international community.....	87 - 89	23
IV. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS.....	90 - 104	24

Introduction

1. The Special Representative conducted a mission to The former Yugoslav Republic of Macedonia from 23 to 25 September 2007. The Special Representative would like to thank the Government for extending her the invitation to visit the country and for the collaboration provided to undertake a fruitful visit. The Special Representative expresses her gratitude to the United Nations Resident Coordinator and her office, particularly the human rights adviser, for the excellent support provided in the organization of the visit.

2. The mission to The former Yugoslav Republic of Macedonia concluded a visit to the region that included Serbia and Kosovo, visited from 17 to 21 September 2007. The findings and recommendations on the visit to the Republic of Serbia, including Kosovo, are presented in a separate report.¹

3. The visit to the Former Yugoslav Republic of Macedonia is a follow-up mission aimed at identifying progress and challenges in the situation of human rights defenders 4 years after the visit undertaken by the Special Representative from 27 to 30 January 2003.²

4. The Special Representative had 25 meetings during her visit to the country. All meetings were held in Skopje. She met with Government representatives, members of the judiciary and the Parliament, the Ombudsperson, the international community, and human rights defenders. In particular, she met with the Speaker of the Macedonian Parliament and other Members of the Parliament, the Minister of Interior, the Minister of Justice, the Deputy Minister of Education, representatives of the Government in charge of integration with the European Union (EU), representatives of the General Secretariat of the Government in charge of cooperation with civil society, the President of the Constitutional Court, the President of the Judicial Council, the Ombudsman, the EU Special Representative and Head of Delegation of the European Commission, the Head of Mission and other representatives of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), representatives of the Information Office of the Council of Europe, members of the United Nations country team and a group of international donors. She also met non-governmental organizations (NGOs), journalists, representatives of trade unions and the Macedonian Bar Association, and individual human rights defenders. A press conference was held at the end of the visit.

I. THE CONTEXT IN WHICH HUMAN RIGHTS DEFENDERS WORK

A. Methodology

5. The visit to The former Yugoslav Republic of Macedonia was a follow-up mission. The purpose was therefore not to make a full assessment of the situation of human rights defenders but to rather evaluate progress and challenges in implementing the recommendations of the Special Representative four years after her last report.

¹ A/HRC/7/028/Add.3.

² See E/CN.4/2004/94/Add.2.

6. The 2004 report was used as the basis to assess progress and gaps in the subsequent four years in the present report. To facilitate the assessment, a matrix was prepared containing a list of over 60 issues, findings and recommendations detailed in a schematic manner. For each item, information on developments that occurred between 2003 and 2007 was sought before and during the mission. This allowed immediate identification of areas in which progress has been more evident, versus other areas which have stagnated more.

7. The assessment undertaken during the visit, however, went beyond the issues raised in the 2004 report to allow new developments to be captured or concerns that were not covered in the first report to be taken into account, to provide an updated overview of the situation of human rights defenders.

B. The pace of change

8. “After your report, nothing changed”, said a human rights defender to the Special Representative. The impatience of those in the front line for the promotion and protection of human rights to see the progress they are striving for is justified. It is in itself a motivating factor to continue defending human rights with renewed energy and commitment.

9. While the Special Representative understands the frustration of human rights defenders who have not seen the improvements expected and shares their disappointment in several areas that will be analysed in more detail, she nevertheless recognizes a number of positive developments since 2003. In particular, she is impressed by the progress made by defenders themselves in terms of their increased level of capacity, professionalism, expertise on human rights methodologies, as well as more clarity about their objectives and strategies for achieving them.

C. From the Ohrid Agreement to the European Union

10. While the political context of the 2003 visit of the Special Representative was marked by the Ohrid Agreement, which provided a framework for addressing the problems that prompted the armed conflict of 2001, in 2007 the efforts to integrate into the EU dominate the political agenda. This is a major difference from the previous visit and the prominence of the EU agenda had had a tangible impact on the overall situation of both human rights and civil society in the country.

11. On 17 December 2005, the Council of the European Union decided to recognize The former Yugoslav Republic of Macedonia as a candidate for EU membership. Since 2004, European partnerships have been adopted with the countries of the Western Balkans as a means to realize progressive integration with the EU. These Accession Partnerships establish short- and medium-term priorities that the competent State authorities are requested to meet to advance towards EU accession. The European Commission regularly monitors progress in the implementation of these priorities.

12. The priorities set forth in the European and Accession Partnerships include human rights priorities, as well as priorities in areas that have direct influence on the environment in which human rights defenders operate.

13. Human rights priorities for EU accession include, inter alia: (a) full compliance with the European Convention on Human Rights and the recommendations made by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; (b) full implementation of the rules applicable to ethics, internal control, professional and human rights standards in law enforcement agencies, the judiciary and prison administration, including regular training; (c) establishment of effective mechanisms to identify, pursue and penalize all forms of discrimination by State and non-State bodies against individuals and groups; (d) upgrading and implementation of the strategy on equitable representation of non-majority communities; and (e) further implementation of the strategy on equitable representation of non-minority communities.³

14. The European and Accession Partnerships also include a priority on promoting the active participation of civil society. Compliance with this priority prompted the adoption of the 2007-2011 Strategy for Government Cooperation with the Civil Society Sector (see paragraphs 67-71 below).

15. The human rights priorities for accession to the EU, as well as other requirements that are instrumental to the work of defenders, such as the involvement of civil society in public administration, cooperation with the Ombudsman or collaboration with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), are definitely a powerful engine to further the human rights agenda and progress can be registered in several areas as a consequence of EU requirements and their monitoring. “Whenever we want to move faster, we lobby the EU”, commented a human rights defender to underline the effectiveness of having the backing of the EU in pursuing human rights objectives.

16. While recognizing the benefits of the EU framework in making progress on human rights, the Special Representative warns that political will and the genuine commitment and participation of national public authorities are fundamental to ensuring that achievements in this area are sustainable and that human rights priorities are not empty programmatic objectives in the progress towards EU accession.

D. Decentralization

17. In the 2004 report, some concerns were expressed as to the possible negative consequences for human rights defenders triggered by the ongoing decentralization process envisaged by the Ohrid Agreement and supported by the EU. With the local authorities assuming more functions and competencies, the potential for committing human rights abuses at the local level had increased, as had the need to monitor local institutions. As the bulk of human rights defenders were based in Skopje, their monitoring capacity at the local level was considered not to be strong enough to address the human rights challenges posed by decentralization.

³ Commission of the European Communities, Proposal for a Council decision on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the Former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Decision 2006/57/EC, COM (2007) 659, 6 November 2007. See also Council Decision of 30 January 2006 on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with the Former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Decision 2004/518/EC, 2006/57/EC.

18. While this remains a concern, the Special Representative welcomes the capacity-building programmes specifically aimed at strengthening local civil society organizations and reducing the monitoring gap at the local level.

19. Another positive development is the structure of the Office of the Ombudsman, who has six regional offices in the country. Regional offices facilitate access to the Ombudsman at the local level. However, more awareness-raising and training on the role and functions of the Ombudsman is needed among local authorities, whose collaboration with the Office of the Ombudsman is still deficient.

20. With the decentralization process, municipalities should in principle also fund civil society organizations but this is not actually happening yet.

E. Progress and setbacks in the overall human rights situation as identified in the 2004 report

21. In the 2004 report, concerns over the overall human rights situation mainly referred to discrimination on the basis of ethnicity. Non-discrimination and equitable representation of non-majority communities remain among the outstanding human rights priorities established by the EU.

22. Progress can be registered in the availability of higher education opportunities for ethnic Albanians as well as pre-employment training programmes for minority public servants. This should give better employment opportunities for minority communities.

23. Despite some efforts to improve education opportunities for Roma, Turkish and Vlach minorities, there has been no tangible progress in this area. It is regrettable that the Ministry of Education has taken ad hoc but not concerted action to implement the Plan of Action for the first phase of the World Programme for Human Rights Education (2005-2009). Human rights education is not only about introducing human rights in school curricula. It is also about inclusion as opposed to exclusion and marginalization, it is about equality as opposed to discrimination and stigmatization. The Plan of Action is a policy framework that would be instrumental in addressing and redressing discrimination practices in the country.

II. HUMAN RIGHTS DEFENDERS

24. The major area of progress identified by the Special Representative is the improved capacity and expertise of human rights defenders on human rights methodologies, strategies and planning frameworks, advocacy and communication skills, among others. Overall their discourse is more articulate and focused, as it is backed by more years of experience.

25. Human rights defenders had frank discussions with the Special Representative on their strengths and weaknesses. The Special Representative considers the openness to self-criticism showed by defenders in her discussions with them as an indication of maturity and self-confidence that was not there four years ago.

26. In terms of thematic areas of work, some trends identified in the 2004 report were confirmed, such as the strength of the women's movement, the steady growth of capacity and

activities carried out by defenders working on the rights of Roma. New thematic areas are now on the agenda of human rights defenders. Work on the human rights of persons with disabilities has become prominent in the country. Another emerging area is the rights of lesbians, gays, bisexual, transgender and inter-sexual persons (LGBTI). While the difficult access to public authorities for NGOs working on LGBTI rights is a concern, the Special Representative notes as a positive development the solid work of defenders on LGBTI rights, who are well-integrated among human rights organizations, formed a coalition to pursue improvements in the legislation, and achieved changes in media ethics banning homophobic positions.

27. In terms of geographic distribution, human rights organizations continue to be mainly concentrated in Skopje, as was noted at the time of the 2003 visit, although there have been some improvements thanks to the training provided by international organizations to human rights organizations working outside the capital.

28. In 2003, there were 5,289 civil society organizations registered in Macedonia, 43 per cent of which were registered in Skopje. According to the Directory of Civic Organizations, the number of active organizations is far smaller and amounts to 1,512, of which 23 per cent are active in Skopje.⁴

A. Women human rights defenders

29. “The women’s movement has such a large social capital that it does not need the support of the international community to operate”, commented a defender. Women’s organizations are considered the strongest sector of civil society. The empowerment of women is perceived as one of the areas in which civil society organizations have achieved the most. While there is overall a relatively low percentage of citizen participation in civil society activities, the highest rate of participation is in women’s organizations. Women’s organizations have a relatively large presence throughout the country, as compared to other organizations, which tend to be concentrated in towns and in Skopje in particular.

30. Women’s organizations have several examples of networks, mutual cooperation and lobbying. For example, the Macedonian Women Lobby (MZL), established as an informal movement in 2000, is a coalition of leading women from civil society organizations and unions, political parties, the media, public authorities, as well as women who are experts in different fields. MZL played a role in the inclusion of gender quotas in elections, commended by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).⁵

31. The Union of Women Organizations of Macedonia (UWOM) is a network of 64 independent women organizations throughout the country with members of different ethnic, national, and religious affiliation.

⁴ Macedonian Center for International Cooperation, *An Assessment of Macedonian Civil Society: 15 Years of Transition – A Country Moving towards Citizen Participation*, Skopje, 2006, p. 34.

⁵ CEDAW/C/MKD/CO/3, para. 25.

32. Women's organizations also participated in the review undertaken by the CEDAW Committee of The former Yugoslav Republic of Macedonia and submitted two shadow reports to the Committee, one on the overall situation of women's rights and another on Roma women.

B. Achievement in building the capacity of human rights defenders

33. In 2003, the Special Representative made a positive assessment of the training programmes for human rights defenders conducted by international organizations, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), OSCE and the Council of Europe.⁶

34. OSCE and the Council of Europe continue to provide training to defenders, while the OHCHR project ended in 2006. Assistance is provided through a national human rights adviser in the office of the Resident Coordinator but without a direct engagement in project activities. Support to human rights defenders provided in this framework includes, inter alia, the establishment of a civil society focal point within the United Nations Country Team in 2006 aimed at facilitating relationships between the Team and civil society organizations, the dissemination of information on and facilitation of access to funds for human rights activities implemented by grass-roots civil society organizations, such as the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture and the United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery.

35. Defenders evaluated positively the training provided to them by international organizations. They deemed the training useful in giving them recognition and in encouraging them to be vocal. They also considered it an important opportunity to get to know each other and build contacts. They pointed to the need for follow-up training.

36. The Special Representative noted some improvement in the capacity of human rights organizations to work on monitoring and protection, including by using international and regional human rights mechanisms. The shadow reports submitted to CEDAW are an example.

37. There is also a better level of networking through international and regional coalitions, which facilitate participation in international settings and give them access to capacity-building programmes available outside the country.

38. However, most NGOs do not have the capacity to pursue cases until the end among those they take up in their protection activities. This requires resources, including legal expertise, which most NGOs still do not have. The inability of defenders to seek remedies and redress is also due to the insufficient mechanisms that they have at their disposal for their protection activities. For instance, access to information is not granted in many crucial areas, including on violations committed by the police. The absence of an external oversight mechanism is another obstacle in the activities of defenders that report on alleged violations committed by the police (see paragraph 75 below).

⁶ E/CN.4/2004/94/Add.2, para. 40.

C. The independence of civil society organizations and public perception of their role and performance

39. A survey among communities' samples showed a relatively low level of public trust in the institutions, including civil society organizations.⁷ However, when it comes to concrete services to the people, they are considered more helpful in resolving the problems of communities than Government institutions.⁸

40. Concerns about the independence of civil society organizations from political parties were expressed both by some defenders as well as public authorities. Subjective

politicization of civil society organizations is considered a problem that affects the credibility of civil society and contributes to a negative image in the media and public opinion.

41. Some organizations were aware of their own responsibility in creating the negative image they have in media and in public opinion, and pointed to the need to develop media strategies to improve the quality of media coverage of human rights and of the work of defenders.

42. Other organizations identified a lack of or limited transparency of civil society organizations as a problem of Macedonian civil society that weakens their image in public opinion. Only a small number of organizations provide public access to their sources of funding. While most of civil society's funding relations are with foreign donors and therefore primary accountability is towards them, transparency towards the general public is an important element of integrity and credibility. Gaining the trust of citizens can also have financial benefits in the medium and long term, as sources of funding will have to be more and more sought at the local level to ensure financial sustainability.

43. Under the motto "Together for Transparency" some organizations decided to voluntarily publish their annual reports, financial reports and independent audit reports.

44. The Special Representative acknowledges that issues of transparency and credibility must be addressed by civil society, in particular the community of human rights organizations. However, she has observed that in many transitional societies a growing civil society with relatively more resources at its command and a focus on the promotion of rights that may not yet be fully understood or respected, may encounter a level of resistance from social and State institutions. This can lead to misperceptions which may arise because of the nature of the State and society rather than as a consequence solely of the shortcomings of the groups striving for rights. She, therefore, believes that removal of misperceptions as well as building a more positive image of human rights organizations and defenders is a collective responsibility, requiring contributions from State institutions, social actors and defenders themselves. This is a crucial undertaking. Support for the work and activities of defenders has a direct relation to the level of respect for human rights in any country.

⁷ Civil society organizations rank second in public trust, after the armed forces and before business, media and Government and political parties. Macedonian Center for International Cooperation, *An Assessment of Macedonian Civil Society...* (see footnote 4 above), p. 105.

⁸ Ibid., p. 106.

D. Networking

45. In her 2004 report, the Special Representative expressed her concern about the limited level of networking and coordination among defenders.

46. Some improvements can be registered in this area. Umbrella organizations on the basis of thematic area or target group (women, Roma, disability) coordinate the work of several organizations. As mentioned, the women's movement is the best organized and with a large presence on the ground.

47. Other initiatives are aimed at combining efforts on common human rights objectives. This is the case of the coalition "All for Fair Trials" established in 2003 with the support of OSCE. The coalition represents a network of 22 independent NGOs engaged in promoting respect for international standards on fair trials.⁹ A more recent initiative was the establishment in 2007 of a coalition of NGOs working on a proposal for an anti-discrimination law.

48. Another coordinating entity is the Civic Platform of Macedonia established in March 2004. It is composed of 36 organizations that wanted to create an open space to improve communication, coordination and cooperation of civil society and facilitate the establishment of partner relations with the Government, the business sector and international organizations.

49. Despite these efforts in improving coordination among civil society organizations, the Special Representative notes that human rights organizations still do not form a real human rights community that can voice the positions of human rights defenders more forcefully and protect defenders. Human rights organizations still do not see it as part of their role as defenders to systematically protect defenders at risk, those who are marginalized or are facing difficult battles. The Special Representative is encouraged by some examples of solidarity expressed by human rights organizations when defenders had been unfairly attacked by the media or politicians. She hopes that these examples will gain consistency and pave the way for a solid human rights community in Macedonia.

E. Defenders at risk

50. Overall, human rights defenders enjoy a good level of security and attacks and threats to their security are not systematic. However, defenders working on some thematic areas are more exposed to violations. This is the case for defenders working on anti-corruption cases and on minority issues, be they ethnic, religious or both.

51. The Special Representative was informed of a recent case of a human rights defender assaulted and insulted with racist comments because of his mixed marriage and his position on the law of religious communities. Fifteen NGOs intervened to condemn the attack and expressed their solidarity with the defender. These fifteen NGOs were in turn discredited by the media and some political parties, which labelled them as "*wahabists*".

⁹ <http://www.all4fairtrials.org.mk>.

52. On anti-corruption work, the Special Representative followed up the case of Mr Zoran Bozinovski, an investigative journalist working on anti-corruption cases. The attacks against Mr Bozinovski were already taken up in her 2004 report¹⁰ and his situation was then followed by communications sent on three occasions in the following years.¹¹

53. Over the last few years, Mr Bozinovski has faced numerous defamation legal suits, reportedly orchestrated by those whose supposed corruption he was investigating. He reported that the intervention of the Special Representative through the communications on his situation that she sent to the Macedonian Government contributed to saving him from serving a three-month prison sentence. Mr Bozinovski explained how the legal suits against him are meant to impede him in investigating corruption and are reactivated as soon as he touches sensitive issues in his investigative work. The journalists' association has not been able to defend him and the only support he has received came essentially from international organizations.

54. While the relentless judicial prosecution of Mr Bozinovski might be an isolated example and not a systematic targeting of a journalist, the fact that the support he received came from the international community and not from national organizations illustrates how human rights organizations are still not able to assess facts and to act as a community of defenders that systematically protects and expresses solidarity to defenders under attack or facing difficulties. The Special Representative welcomes the subsequent information provided by the Government on this point, i.e. the recent adoption of the Code of Best Practices for financial support of citizens' associations and foundations.¹²

F. Funding

55. Funding of human rights organizations continues to come mostly from international donors. This was already a concern in 2003 in terms of the medium and long-term sustainability of the work of defenders when international funding would significantly reduce. The shrinking of international funding is even more real in 2007. This is happening at a time when alternative funding at the national level is still not available in sufficient quantities. The Special Representative is also concerned that the Government has not established transparent criteria and procedures for granting Government funding to civil society organizations.

56. With few exceptions, international donors continue to be less than responsive to funding requests for programmes and activities on the basis of the priorities identified by defenders themselves. Donors tend rather to support what they consider priorities.

57. As already observed in 2003¹³ the tax regime is a major obstacle to the development of civil society. The Strategy for Government Cooperation with the Civil Society Sector (see paragraph 67 below) recognizes the need to reconsider the present tax framework and envisages

¹⁰ E/CN.4/2004/94/Add.2, para. 74.

¹¹ In 2004 (E/CN.4/2005/101/Add.1, paras. 530-532) and in 2006 (A/HRC/4/37/Add.1, paras. 410-412).

¹² Published in the Official Gazette No. 130/2007.

¹³ E/CN.4/2004/94/Add.2, para. 35.

reforming it to extend exemption from tax to civil society organizations in line with EU regulations and to foster the development of such organizations.¹⁴

III. AN ENABLING ENVIRONMENT

A. International human rights instruments

58. Since 2003, there has been progress in the ratification of international human rights instruments. In particular, The former Yugoslav Republic of Macedonia has ratified the following instruments: the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, and on the sale of children, child prostitution and child pornography and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

59. The Special Representative recommended the ratification of the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, which did not occur. The former Yugoslav Republic of Macedonia has signed and is taking steps to ratify the other core international human rights standards, namely the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, for whose ratification a law is being drafted; the Convention on the Rights of Persons with Disabilities; and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, for which a pre-ratification analysis is under way.

B. Freedom of expression, access to information and freedom of association

60. The Special Representative confirms the overall positive assessment of the respect of freedom of expression that she already expressed in 2003, although she noted a more difficult environment for defenders working on anti-corruption, minority issues, both ethnic and religious, and for those taking positions critical of the Government.

61. The Special Representative welcomes the adoption of a law on access to information, which responded to one of her earlier recommendations.¹⁵ The law has been in force since 1 September 2006. It established an independent five-member Commission to oversee the implementation of the law.

62. A more effective implementation of the law has, however, yet to be achieved. A monitoring project on the implementation of the law reported that only 35 per cent of requests are answered. When information is not provided, it does not happen on the basis of the established procedures. In 65 per cent of cases the information is provided as soon as the refusal to provide information is appealed before the Commission. This indicates a widespread lack of responsiveness of the public authorities that is redressed only when accountability mechanisms are activated. The role of the Commission was not considered to be proactive enough to counter

¹⁴ Government of the Republic of Macedonia, *Strategy for Government Cooperation with the Civil Society Sector, 2007-2011*, Skopje, January 2007, pp.22 and 23.

¹⁵ E/CN.4/2004/94/Add.2, para. 79 (a).

the problems in the implementation of the law and it is perceived as accepting passively the excuses given by public authorities for failing to provide the information requested.

63. Freedom of association is guaranteed in article 20 of the Constitution and it is generally respected. Problems in respecting freedom of association affect trade unions in the private sector in companies with foreign capital, particularly in the textile industry.

64. The Government envisages amending the Law on Citizen Associations and Foundations adopted in 1998 to improve the conditions for the establishment and functioning of civil society organizations and to be in line with EU practices and regulations. In particular, amendments are aimed, on the one hand, at enabling associations to engage directly in economic activities, thus facilitating their ability to generate income for the delivery of their activities and the coverage of their expenses. On the other hand, the role of civil society organizations working on activities of public interest will be strengthened with the introduction of tax benefits.¹⁶

C. Government's attitude and policies

65. The Special Representative notes that there has not been much progress on consultation processes with civil society, which still take place on an ad hoc rather than systematic basis and mainly because of the efforts made by civil society organizations or because of the pressure of international organizations.

66. The Special Representative is encouraged by and welcomes the adoption of the Strategy for Government Cooperation with the Civil Society Sector for 2007-2011, which is meant to provide a framework to institutionalize cooperation between the Government and civil society. If implemented properly, the Strategy has the potential to redress the present situation of ad hoc, insufficient and in some cases non-existent consultation processes with civil society.

67. The Strategy outlines action in seven areas: (a) upgrading of the legal framework for the development of the civil sector; (b) participation of the civil sector in decision-making processes, which includes the participation of civil society organizations in drafting, implementing and monitoring public policies and national laws; (c) maintaining inter-institutional cooperation; (d) maintaining inter-sector cooperation; (e) involvement of the civil sector in the process of EU integration; (f) provision of more favourable conditions for the civil society sector; and (g) continuous development of the civil society sector.

68. The Unit for Cooperation with Non-governmental Organizations within the General Secretariat of the Government holds the primary role for coordinating, monitoring and reporting on the implementation of the Strategy. In the second year of implementation, an assessment of how the Strategy is being implemented will be conducted by means of a broad consultation process.

69. The Strategy concerns collaboration between Governmental authorities and the civil society sector and does not extend to local authorities. Measures to institutionalize collaboration

¹⁶ Government of the Republic of Macedonia, Strategy for Government Cooperation with the Civil Society Sector, 2007-2011, Skopje, January 2007, p. 27.

between civil society organizations and all public authorities, in particular local authorities and the Parliament, are needed to overcome the present trend of ad hoc consultation processes.

70. As mentioned above, the Strategy was adopted to comply with the requirements of EU accession. While EU accession is definitely a priority for the Government, the human rights requirements that are to be met to achieve it are perceived more as part of the EU package than as a priority per se, for which there is political commitment. This might be an obstacle for the sustainability of human rights achievements, particularly when the attitude of the Government towards civil society organizations is not actively supportive. For instance, the Special Representative sees as an indication of such an attitude the lack of responsiveness or reaction of the Government at information, reports, cases, complaints of human rights violations and abuses documented by defenders and brought to the attention of the concerned authorities, without a consequent action being taken by the Government to investigate, respond, or even refute the alleged facts.

D. The police

71. Compared to the assessment of 2003, some improvements can be registered in the role of the police: (a) the establishment of an internal complaint procedure in 2003; (b) a more ethnically diverse police force; (c) implementation of human rights training programmes for the police with the support of international donors; (d) the ongoing programme supported by OSCE on the establishment of community policing aimed at bringing the police closer to citizens; (e) an overall improved attitude towards citizens, with the exception of Roma who continue to be victims of abusive behaviour by the police.

72. Most of the abuses allegedly committed by the police relate to a police unit called “Alfi Unit”. The Alfi unit aims to counter urban crime and works in plain clothes. Access to their files is very limited and it is therefore difficult to investigate complaints of abuse committed by them. Even the Ombudsman does not have adequate powers or the instruments to fully investigate complaints against members of the Alfi unit.

73. The Internal Control and Professional Standards Department within the Ministry of Interior is the internal oversight mechanism to investigate complaints of abuse by the police. In his 2006 annual report, the Ombudsman reported that the Department “continued to conceal the relevant factual situation in some cases and to withhold information regarding the exceeding of the official authority and the excessive use of force requested by the Ombudsman. The Internal Control and Professional Standards Department during the reporting year continued to show unprofessional attitude towards the function of internal control mechanism”. He therefore recommended a “higher level of professionalism by the official in the area of human rights while performing police affairs and impartial and responsible work of the Internal Control Department”.¹⁷ The Special Representative takes note of the efforts made in this respect through the capacity building project funded by the European Agency for Reconstruction aimed at improving the functioning of this control mechanism.

¹⁷ Republic of Macedonia Ombudsman, *Annual report 2006*, pp. 57 and 59.

74. The Special Representative is concerned that an external oversight mechanism to investigate abuses committed by the police does not exist. The problems of the internal mechanism outlined above make the absence of an external control mechanism an even more worrying concern. The Special Representative is encouraged by the ongoing initiative of OSCE, which is coordinating a working group composed of public authorities, civil society organizations, international organizations and the Ombudsman, with the aim of proposing a possible external control mechanism and paving the way to setting it up.

75. Another problem is that human rights defenders do not have access to detention centres and police stations. This is a serious obstacle that prevents defenders from fully performing their monitoring and protection role. The Government has assured the Special Representative that the OSCE initiative will alleviate the problem of access to police stations for defenders.

76. As regards police stations, the Minister of Interior referred to legal obstacles, namely the limitations provided for by the Law on Classified Information, which prevents the access of human rights defenders to police stations. Only the Ombudsman can access police stations.

77. As regards detention centres, which are under the responsibility of the Ministry of Justice, defenders stated that they are either denied access or have difficulty in getting permission to visit detention centres.

E. The judiciary

78. The Law on the Independent Court Budget was adopted in September 2003 and entered into force in January 2004. The law provides for the judiciary to prepare and execute its own budget. It has therefore improved the independence of the judiciary. However, representatives of the judiciary pointed to the need to further amend the law to improve the independence of the judiciary.

79. The lengthy duration of judicial procedures continues to be a major cause of inefficiency of the judiciary. However, the Special Representative appreciates the information provided by the Government on the amendment of some laws on judicial proceedings. These amendments have shown some progress in reducing the duration of judicial proceedings between 2005 and 2006.

80. Another concern is the non-application to domestic jurisdiction of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe and of the decisions of the European Court of Human Rights.¹⁸

81. The Special Representative recalls that an independent judiciary open to human rights concerns and protective of the right to defend human rights is a determining factor in ensuring an enabling environment for defenders. For instance, rights like freedom of expression, peaceful assembly and association, are important for the work of defenders. The Constitutional Court plays a fundamental role in interpreting these rights in a manner that is protective of human rights activities and of defenders exercising these rights in their work. An independent judiciary

¹⁸ Ibid., p. 29.

open to human rights also means a judiciary which proactively takes measures to facilitate the use of the judicial system by defenders for the protection and promotion of human rights.

F. The Ombudsman

82. The law strengthening the Office of the Ombudsman was adopted in 2003. The law strengthened the inspection functions of the Ombudsman. For instance, he or she can undertake unannounced visits to police stations. Despite improvements in the investigative functions of the Ombudsman, its mandate is not considered in compliance with the Paris Principles for national human rights institutions. Concerns regarding the limited scope of the mandate and its independence persist.

83. The cooperation of public authorities with the institution also continues to be a concern. “During 2006 a positive trend was noted in the cooperation with the Ombudsman, but the obstruction of its work from certain bodies of the State continued”, reported the Ombudsman.¹⁹ Some improvements were brought about by the introduction of reporting obligations established by the Government in 2005. All Governmental authorities are requested to submit quarterly reports on how they collaborate with and respond to the requests of the Ombudsman and justify failure to collaborate with his Office. The Ombudsman acknowledged some improvements in the responsiveness of Governmental authorities after the introduction of the quarterly reports. Nevertheless, he pointed to the poor quality of many responses and the need for improvement in this area.

84. The collaboration of the police with the Ombudsman also needs improvement. The Ministry of Interior issued circulars instructing the police to collaborate with the Ombudsman. This yielded results but more efforts are still needed to have a fully cooperative police force.

85. Another area that needs improvement is the awareness of local authorities of the role and functions of the Ombudsman. The six regional offices of the Ombudsman facilitate access to the institution at the local level but they need more visibility, including and especially among local authorities, to perform their functions effectively.

86. The Special Representative welcomes the support provided by international organizations, such as OSCE and OHCHR, to the Office of the Ombudsman, particularly in the area of capacity-building.

G. The international community

87. The international community continues to play a fundamental role in the country, both financially and in influencing policies and decision-making at the political level. As already mentioned, the EU has gained prominence, as membership is a high priority.

88. This influence has resulted in some positive measures in the short term. However, a commitment of State institutions to continue and sustain the improvement in the environment for the protection and promotion of human rights would be a more dependable guarantee.

¹⁹ Ibid. p.59.

89. The Special Representative welcomes the establishment of the Civil Society Advisory Board within the United Nations Country Team as a space for civil society to meet and interact with the United Nations in a regular and institutionalized manner. The Advisory Board is meant to provide a forum to discuss, propose and evaluate United Nations policies at the country level. The Special Representative suggests discussing possible actions to promote the implementation of the Declaration on human rights defenders and to follow up the recommendations of this report.

IV. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

90. The Special Representative recognizes a considerable number of positive developments since her first visit. The most remarkable is the increased capacity and professionalism of human rights defenders, although human rights organizations still do not form a community in a position to protect defenders.

91. Another area of major progress has been in legislation, with the adoption of several laws relevant to the work of human rights defenders, including the law strengthening the inspection functions of the Ombudsperson; the law on free access to public information; the abolition of prison sentences for the offence of defamation; the law on an independent court budget, among others.

92. While progress can be registered on the adoption of new laws, the implementation of these laws is often not satisfactory. Enforcing and monitoring mechanisms that defenders can use to report cases of non-compliance and protect affected victims are still lacking, are insufficient or do not function properly. This has created an environment in which Government responsiveness is limited or absent.

93. The Special Representative recognizes that the international community has played an important role in strengthening human rights defenders in the country, both in funding their projects and in building their capacity. The lobbying and advocacy efforts of human rights defenders have often been more successful when backed by international organizations. The current trend of reducing funds for civil society organizations is a concern. The Special Representative firmly believes that support to civil society organizations by foreign donors is essential even if the Government's capacity to extend grants to NGOs is increased.

Recommendations for the consideration of the Government

94. Institutionalize interaction and consultation processes with civil society in drafting legislation and policies, in reporting to international human rights mechanisms, and in other relevant areas of Government action. The Strategy for Government Cooperation with the Civil Society Sector can provide an appropriate framework for such cooperation provided its application is extended to local authorities and the Parliament.

95. Establish enforcement and monitoring mechanisms that defenders can use to report non-compliance with legislation and human rights abuses. Among those mechanisms, an external oversight mechanism to investigate abuses committed by the police should be established and the Commission in charge of monitoring the implementation of the law on

access to information should be reinvigorated. Ensure that complaints on abuses committed by the Alfi Unit of the police can be independently investigated, including by the Ombudsman. Monitoring mechanisms should be established and accessible at the local level.

96. Remove the legal and administrative constraints that prevent human rights defenders from accessing detention centres and police stations and ensure that such access is given.

97. Ensure tax exemption for voluntary organizations and expedite the legal and procedural requirements for this purpose.

98. Take the appropriate measures to ensure that freedom of association of trade unions in the private sector is respected, so that activities for the promotion of labour rights are protected.

Recommendations for the consideration of human rights defenders

99. Develop and strengthen initiatives aimed at forming a human rights community able to voice the positions of human rights defenders more forcefully and act as a protection network for defenders.

100. Improve strategies to work with the media to increase media understanding of and reporting on human rights and the work of defenders.

101. Consider the implementation and strengthening of measures aimed at improving the transparency and accountability of civil society organizations in order to build public confidence and to ensure that the human rights agenda remains relevant to the problems faced by the population.

102. Strengthen human rights work with a multi-ethnic dimension. This will contribute to overcoming deeply rooted discriminatory practices along ethnic lines and will strengthen the reconciliation process.

Recommendations to the international community

103. Accompany the transition process until the end and continue supporting human rights defenders, both in terms of funding and capacity-building. This should be done while respecting the independence of defenders in determining their priorities and strategies and preserving their role of monitoring State institutions.

104. In assessing the country's compliance with human rights requirements, such as those needed to access the EU, use indicators that go beyond superficial changes. For instance, in the case of legislation, it is not enough to just adopt laws more conducive to the work of human rights defenders, but also to demonstrate effective implementation.
